

La Argentina no está condenada al éxito

Rodrigo E. Zarazaga S.J.

Hacia fines del Siglo XIX el Presidente Julio Argentino Roca proclama ante el Congreso de la Nación que los argentinos "...somos la traza de una gran nación,...

Hacia fines del Siglo XIX el Presidente Julio Argentino Roca proclama ante el Congreso de la Nación que los argentinos "...somos la traza de una gran nación, destinada a ejercer una poderosa influencia en la civilización de la América y del mundo...", y en el inicio del siglo XXI el presidente Eduardo Duhalde afirma que los argentinos "...estamos condenados al éxito".

Ambas afirmaciones, están separadas por más de 120 años de historia y un contexto asaz diferente. Si la afirmación de Roca resultaba altisonante, era al menos comprensible en la próspera Argentina de fines del siglo XIX, mientras que la de Duhalde, manteniendo la altisonancia, se volvía casi ridícula en la Argentina quebrada del siglo XXI. Pero la disimilitud de contexto que separa a ambas afirmaciones no deja en la inopia los condicionamientos recurrentes en nuestra historia para el desarrollo del país que continúan presentes hasta nuestros días. Condicionamientos que encuentran una piedra angular en esa confianza desmedida en las riquezas naturales del país. Ese obstinado convencimiento de que Argentina, como granero del mundo, es un país destinado a recorrer el camino al éxito, sin importar lo que ocurra con nuestras instituciones nos ha acompañado hasta nuestros días, al igual que los deseos hegemónicos de quienes han pretendido conducir al país en esa senda.

Nuestra condena no es, entonces, al éxito, sino al tener que soportar las invasiones de escena de actores políticos que se consideran los mejores administradores de esa riqueza y que se muestran entonces dispuestos a tender su manto de unanimidad política sobre un pueblo un tanto dispuesto a apoyar cualquier alternativa que le oculte su nueva realidad, siempre más pobre que lo que la historia le prometía en sus inicios.

La historia política argentina esta signada por una contradicción entre los valores que se proclaman y la política que se ejecuta, contradicción que siempre existe pero que en nuestro caso adquiere dimensiones abismales e infranqueables. Baste de ejemplo la generación liberal de 1837, que proclamó un credo liberal cuyas prácticas políticas hacia el interior desmentían. Alberdi que proponía para América Latina reyes con nombre de presidentes, propondrá en sus "Bases" un Poder Ejecutivo hegemónico que permitiera la estabilidad que requiere el progreso. Explicará entonces esa contradicción entre teoría y praxis política hablando de una inevitable distancia entre "República posible" y "República verdadera". En Argentina sólo había lugar, en su interpretación, para una "República posible", dado que la riqueza material del país iba acompañada de un pueblo "incapaz de libertad". Ignoraba, aún más que sus compañeros de generación, la medida en que la praxis, desarrollada dentro del marco de la "posible" que pregonaba, condicionaba la realización de la "verdadera". Su propuesta parecía pasar por alto

la dificultad de sembrar el orden haciendo la guerra, formar las instituciones vulnerándolas y arribar a la democracia practicando el autoritarismo. La propuesta de Alberdi tendría un legado visible en la historia argentina en una interpretación plebiscitaria de la democracia, a la que no permanecieron ajenos personajes como Yrigoyen y Perón.

La valoración y el respeto de las instituciones parece, en manos de nuestros presidentes, la cáscara formal con la que se envuelven una y otra vez los proyectos personalistas de hegemonía política. Roca, Yrigoyen, Perón, la mayoría de los presidentes golpistas y más recientemente Alfonsín y Menem -resta ver hasta qué límites pretende Kirchner llevar su poder- se consideraron los líderes de movimientos que se identifican con la patria misma. No pocos se sintieron con el derecho a extender su unanimidad política sobre el país y a declarar “antipatria”, “cipayos” o “buitres” a cualquiera que no se mostrara entusiasmado por engrosar sus filas. Erigidos en administradores de esa riqueza que consideraban desbordante e inagotable buscaron la acumulación de poder que les permitiera ajustar las instituciones a sus intereses y gobernar bajo ningún otro dictado que el de la razón propia.

Baste recordar que Yrigoyen afirmaba que la “UCR es la Nación misma” y “los que abjuran de su fe redentora, son los Judas malogrados de las más justas y santas inspiraciones”, y que Perón acusando también de judas a sus opositores afirmaba sin tapujos que había dado “al pueblo argentino la oportunidad de elegir por sí entre los opositores y nosotros; el pueblo se decidió por nosotros. En consecuencia ese problema ha terminado. En la República se hace lo que decimos nosotros”.

Con facilidad inusitada Yrigoyen y Perón, pero también los referentes más actuales de los partidos que fundaron, confunden unidad nacional con unanimidad política y gobernabilidad con hegemonía y arbitrariedad institucional. Que este condicionamiento recurrente perdura hoy lo demuestran el tercer movimiento histórico que pretendió encabezar Alfonsín, la reforma constitucional y la reelección menemista y la concesión de “superpoderes” a nuestro actual Presidente, esto para no mencionar lo que ha ocurrido en los últimos 10 años con la Corte Suprema.

La política como competencia y construcción entre partidos sigue siendo un déficit en un país en que las instituciones democráticas son por momentos una mera retórica constitucional cuya repetida violación solo alcanza el reproche fútil de inermes opositores y el obsecuente silencio de los sectores más vastos y poderosos de la sociedad.

Los argentinos debemos reprocharnos la supervivencia de dos círculos viciosos que impiden nuestro desarrollo. El círculo vicioso en el que, a un intento de unanimidad, sigue un movimiento de signo contrario, que busca borrar las huellas del anterior, produciendo una falta de continuidad en los planes políticos y la imposibilidad de fijar objetivos comunes, ubicados por encima de las diferencias partidarias, y el círculo vicioso que conforman las relaciones perniciosas entre dirigentes carismáticos, instituciones débiles y sociedad cómplice. En este sentido, la consigna “que se vayan todos”, que se difundió en la crisis del 2001, parecía ignorar que esa clase dirigente que repudiaba era también un producto de ella misma.

Si todavía abrigamos alguna esperanza de transitar el camino que nos separa del desarrollo de una República verdadera, debiéramos, como sociedad, mostrarnos menos permisivos con los Presidentes que, en sus deseos hegemónicos, arrancan hojas a la Constitución todos los días como si fuera un almanaque y menos proclives a reelegir a quienes, en su guerra santa, adaptan la Corte Suprema y demás instituciones a su propio gusto. Si resultaba atractivo y convincente concebirnos como un granero lleno, cuando los hechos corroboraban a cada instante esa creencia, hoy no podemos dar por descontado la generosidad del porvenir, sino que debemos superar la falta de rumbo esencial con un proyecto de país inclusivo. Si el pasado permitió que la política fuera la disputa por ese botín cada vez más rico que era el Estado argentino, entre aparatos personalistas deseosos de extender su unanimidad e identificarse con la Nación toda, el presente requiere revalorizar la política con mayor seriedad institucional democrática. La sociedad parece haber tomado conciencia de esta necesidad en la crisis del 2001, su dirigencia todavía perpetúa su interminable disputa ciega.